

Cientos de pacientes pierden segunda oportunidad de vida tras 8 años sin trasplantes

Un triste aniversario marcó el pasado domingo 1 de junio, cuando se cumplieron ocho años desde la suspensión del sistema de procura de órganos para trasplantes en el país. La crisis, lejos de mejorar, se ha agravado con el paso del tiempo y ha dejado a cientos de pacientes en la compleja espera de una segunda oportunidad para vivir.

Desde 2017, los trasplantes fueron suspendidos debido a la falta de medicamentos esenciales, los inmunosupresores. En 2025, la situación aún es crítica, con pacientes que han pasado hasta 10 meses sin recibir el tratamiento que necesitan para sobrevivir, denunció Reymer Villamizar, director de la oenegé Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV).

Aunque estos fármacos son una combinación de varios fármacos, algunos llevan años sin ser entregados de manera continua por parte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss) a través de las Farmacias de Alto Costo del país, señaló en conversación con el **Diario La Verdad**.

Sin inmunosupresores, incluso si el país tuviera la infraestructura necesaria, los trasplantes no serían viables, ya que son esenciales para garantizar la supervivencia del órgano trasplantado.

“Si no hay medicamentos hace que el trasplante esté condenado al fracaso”, declaró Villamizar.

El también miembro fundador de la organización señaló que la falta de cifras oficiales dificulta conocer el número exacto de personas que han sido afectadas por la suspensión. Sin embargo, señaló que el deterioro del sistema inició antes de 2017.

En 2014, el Gobierno nacional traspasó la gestión de los trasplantes de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) a la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), lo que, a juicio de Villamizar, marcó el inicio de un abandono progresivo del sistema.

El Zulia y la presión de los pacientes

Ante la crisis, algunos trasplantes de donantes vivos relacionados (familiares) comenzaron a realizarse en 2021 como fruto de la presión que grupos de pacientes ejercieron en estados como Zulia, Lara y Distrito Capital.

En el caso de Maracaibo, relató el director de ATV, ese año realizaron alrededor de dos o tres trasplantes en el Hospital Coromoto. Sin embargo, pese a que este hecho fue anunciado con “bombos y platillos” por el Gobierno, no se continuaron los procedimientos.

“De eso no se ha vuelto a hablar, incluso muchas personas de otros estados acudieron allá a ver si le podían hacer un trasplante, por lo menos, de vivo a vivo, o de vivo relacionado”, indicó a **La Verdad**.

Una ley avanzada sin aplicación

Villamizar subrayó que el país cuenta con una ley de trasplantes de tejidos y órganos desde 2012, la cual catalogó de “primer mundo”.

Explicó que esta legislación permite que familiares hasta el quinto grado de consanguinidad sean donantes de hígado o riñón, y establece que toda persona es donante a menos que en vida expresen lo contrario.

A pesar de esto, detalló que la falta de campañas de educación y a ausencia de un sistema de procura de órganos han impedido su aplicación efectiva.

Apuntó que esta ley ayudaría a conseguir más órganos por parte de donantes fallecidos para personas que necesiten un trasplante. Sin embargo, señaló que el país no cuenta con la infraestructura hospitalaria adecuada para que este sistema se ejecute.

“Si una persona fallece en un centro hospitalario que estuvo bajo ciertas condiciones, una terapia intensiva, un accidente de tránsito, o tuvo cierta condición que conllevó a que la persona estando en una UCI ya es irreversible, que tiene muerte cerebral, es cuando esa persona pudiese ser un donante efectivo”, añadió.

Explicó que para que los trasplantes de donantes fallecidos sean viables, es necesario contar, además con una infraestructura adecuada, tener coordinadores hospitalarios, centros de trasplantes con todos los servicios y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) capaces de identificar posibles donantes.

Por este motivo, en la actualidad solo se realizan trasplantes de vivo a vivo, lo que disminuye la probabilidad de muchos pacientes de conseguir una oportunidad de vida.

¿Cuántos afectados?

El director de Amigos Trasplantados de Venezuela citó un estudio realizado por la ONTV en 2021-2022 que estima que alrededor de 1.500 personas podrían haberse trasplantado si el sistema de procura de órganos estuviera operativo. Indicó que, de ella, cerca del 40 % podría ser niño.

Mencionó que en la actualidad hay cerca de unas 6.000 personas en diálisis, pero de ese total indicó que solo un 40 o 50 % podría ser elegibles para un trasplante.

“Hay quienes son más reservados y hablan de un total de cerca de unas 2.000 o 1.500 personas pudieran estar óptimas para un trasplante”, indicó.

De esa cifra, destacó que no todos tienen un familiar que pueda donarles un órgano, por lo que es urgente la reactivación de los trasplantes de donantes fallecidos con las condiciones adecuadas, aunque, denunció, no hay intención aparente por parte del Estado en que esto sea retomado.

El precio de otra oportunidad

Además de la ya complicada situación, Villamizar comentó que el aspecto económico tampoco facilita el proceso de trasplantes. Indicó que, en el país, un trasplante de vivo a vivo en un centro médico privado para 2024 alcanzó los 120.000 dólares.

A pesar de que una persona pueda contar con los recursos económicos suficientes para practicarse un trasplante, este procedimiento no se realiza en todos los centros asistenciales del territorio nacional.

De acuerdo con el miembro fundador de ATV, solo se ejecutan trasplantes en la Clínica Popular El Paraíso, ubicada en Caracas, donde se han realizado cerca de 200 trasplantes en unos tres años, según datos proporcionados por Villamizar.

La incertidumbre de los ya trasplantados

Villamizar señaló que muchos trasplantados viven en una constante incertidumbre debido a la irregularidad en el suministro de los medicamentos esenciales para su tratamiento.

“El cargamento a veces llega, a veces llega incompleto, sobre

todo en el interior, no llega”, mencionó.

El Gobierno nacional atribuye la escasez de medicamentos a las sanciones y el bloqueo económico que Estados Unidos impuso en 2017.

Con información de La Verdad